ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Dr. Carlos ARELLANO GARCÍA *

SUMARIO: 1. *Evolución histórica constitucional.* A) *Constitución Política de la Monarquía Española.* B) *Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana.* C) *Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano.* D) *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.* E) *Leyes Constitucionales de la República Mexicana.* F) *Bases Orgánicas de la República Mexicana.* G) *Constitución Política de la República Mexicana.* H) *Reforma a la Constitución de 1857.* I) *Debates en el Congreso Constituyente de 1856.* J) *Reforma del artículo 93 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, del 4 de junio de 1914.* K) *Mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, ciudad de Querétaro.* L) *Congreso Constituyente de Querétaro de 1916.* M) *Reforma de 15 de diciembre de 1934.* N) *Texto anterior a la reforma de 1994 del artículo 95 constitucional.* 2. *Breve referencia a constituciones de algunos países de América Latina.* 3. *Relaciones del artículo 95 de la Constitución mexicana con otros preceptos constitucionales.* 4. *Breve análisis doctrinal.* 5. *Opinión personal. Proposición de un sistema para el nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA CONSTITUCIONAL ¹

A) *Constitución Política de la Monarquía española*

En la Constitución Política de la monarquía española, que fue promulgada en Cádiz el 10. de marzo de 1812, el artículo 251 exigía, para ser nombrado Magistrado o Juez: haber nacido en territorio español, y ser mayor de veinticinco años. En cuanto al requerimiento de otras calidades, remitía a las leyes secundarias.

Consideramos que tal sistema es idóneo para Magistrados y Jueces pero, para la más elevada de las categorías, como lo es la que corres-

* Profesor de Derecho Internacional Público y Privado en la Facultad de Derecho y de Derecho Cooperativo en la División de Estudios de Posgrado, UNAM.

¹ Cfr. LII LEGISLATURA, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, *Derechos del pueblo mexicano*, México, 1985, artículo 95.

ponde al rango de Ministro del más Alto Tribunal, lo más conveniente es que sea el constituyente quien fije las exigencias a las personas que encarnarán a los señores juzgadores.

B) *Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana*

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, al establecer los requisitos para los individuos que integrarían el Supremo Tribunal de Justicia, en el artículo 182, remitía al artículo 52. A su vez, este dispositivo enlistaba las exigencias correspondientes: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, tener treinta años de edad, buena reputación, patriotismo acreditado con servicios positivos, y tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo.

Destacamos la ausencia de algún requisito que pudiera haber consistido en la tenencia de estudios profesionales en Derecho, lo que pudiera ser explicable por la turbulencia de la época y por el incipiente desarrollo cultural del país, prevaleciente en ese momento. Sin duda, era un acierto que se hubiera marcado el requisito de inteligencia preclara reconocida con la frase: “Tener luces no vulgares”, apropiadas para el desempeño de las “augustas funciones propias de ese empleo”. Es muy acertado el uso del adjetivo “augusto”, expresión derivada del vocablo latino *augustus*² y que alude a aquello que “infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia”. Del término “augusto” cabe derivar que, ocupar un sitial de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ascender a un lugar que infunde y merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. Por ello, el precepto normativo constitucional al que corresponda fijar los requisitos respectivos deberá ser cuidadosamente meditado.

C) *Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano*

En el periodo transcurrido entre la consumación de la Independencia y la expedición de la primera Constitución, de 1824, rigió el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, suscrito en la ciudad de México el 18 de diciembre de 1822. En este documento de carácter

² Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, Editorial Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1970, p. 143.

constitucional se exigía, para ser Juez o Magistrado, ser ciudadano del imperio, treinta años de edad, casado o viudo; no haber sido condenado por delito alguno, gozar de buena reputación; luces e integridad para administrar justicia.

De nueva cuenta, aparece la exigencia de *luces* o sea, se hacía referencia a la claridad de la mente o de la inteligencia en el candidato a Juez o Magistrado. Tal requisito le daba relevancia a un ingrediente muy importante para esgrimir la vara de la justicia.

Trescendente era el requisito de *integridad*. Significaba que, para ser Juez o Magistrado era menester ser íntegro, recto, probo, intachable.

D. *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos*

El Congreso General Constituyente sancionó el 4 de octubre de 1824 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 125 establece que, para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia se necesita: estar instruido en la ciencia del Derecho a juicio de las legislaturas de los Estados; tener la edad de 35 años cumplidos; ser ciudadano natural de la República, o nacido en cualquiera parte de la América que antes de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, con tal que tenga la vecindad de cinco años cumplidos en el territorio de la República.

Se caracteriza este documento supremo por determinar que es necesario “estar instruido en la ciencia del Derecho”. Esto significa que, específicamente, para tener la investidura de individuo de la Corte Suprema de Justicia, no bastaba la mente clara y la probidad. Eran necesarios los conocimientos jurídicos, obtenidos a través de la instrucción. Le correspondía calificar la tenencia de esa instrucción a las legislaturas de los Estados. Este requisito lo entendemos como una posibilidad de acreditamiento de conocimientos jurídicos, sin la intervención de un centro de enseñanza profesional jurídica.

E) *Leyes constitucionales de la República mexicana*

El 29 de diciembre de 1836, fueron suscritas las Leyes Constitucionales de la República Mexicana y, en el artículo 4o. de la Quinta Ley, se precisaron los requisitos para ser electo individuo de la Corte Suprema: ser mexicano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, tener la edad de cuarenta años cumplidos, no haber sido condenado por algún crimen en proceso legal, ser letrado y en ejercicio de esta profesión por diez años a lo menos.

Es interesante señalar que, a través de la edad, ahora de cuarenta años, se pretende en el individuo que accede a Ministro de la Corte Suprema, una mayor experiencia y una más desarrollada madurez de juicio, propia de una edad más avanzada.

A propósito de la edad, en los documentos constitucionales hasta ese momento examinados, no aparece que se fije edad máxima, sólo se señala la mínima.

Se elimina el acceso de improvisados, en lo que hace a los conocimientos profesionales. En efecto, se exige ser *letrado*, o sea, un perito-titulado en Derecho. Adicionalmente se establece el requisito de la experiencia en esa profesión, mediante el ejercicio de ésta por diez años, por lo menos. No basta poseer una profesión si ésta no se ejerce.

F) *Bases orgánicas de la República mexicana*

Las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional, con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 1843 y publicadas por bando nacional el día 14 del mismo mes y año, en su artículo 117, establecieron que, para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, tener la edad de cuarenta años, ser abogado recibido, conforme a las leyes y, haber ejercido su profesión por espacio de diez años en la judicatura, o quince en el foro con estudio abierto y no haber sido condenado judicialmente en proceso legal por algún crimen, o delito que tenga impuesta pena infamante.

De manera expresa, era indispensable *ser abogado recibido, conforme a las leyes*. Es decir, el desempeño de la judicatura, a tan alto nivel, no permitía improvisaciones. Más todavía, es posible ser abogado recibido y no haber practicado la profesión o haber desempeñado actividades apartadas de los renglones de la abogacía en el ámbito de la postulancia y de la judicatura. Estimamos que, en esa virtud resultaba sumamente atinado exigir el ejercicio profesional prolongado por diez años en la judicatura o quince en el foro con estudio abierto. La aptitud de juzgar controversias precisa de un previo camino que se haya recorrido en el ámbito de la administración de justicia, ya sea como juzgador o con el carácter de postulante.

G) *Constitución Política de la República Mexicana*

El Congreso General Constituyente sancionó el 5 de febrero de 1857, la Constitución Política de la República Mexicana, cuyo artículo 93, relativo a los requisitos para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia, resultó muy escueto al requerir estar instruido en la ciencia del Derecho, a juicio de los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

No cabe duda que, constitucional y legislativamente, en lugar del progreso se puede obtener retroceso. Así juzgamos estos pasos hacia atrás. Ya no era requisito ser abogado recibido, por una parte y, por otra parte, ya no se exigía experiencia en la judicatura o en la postulación de la profesión. Peor aún, se dejaba que los electores juzgaran lo referente a la instrucción en la ciencia del Derecho. Esto significaba una contaminación política para un puesto no solamente técnico sino hasta “augusto” como decía uno de los primeros documentos constitucionales.

H) *Reforma a la Constitución de 1857*

El 4 de junio de 1914 se reformó el artículo 93 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 para establecer, por primera vez, una edad máxima de sesenta y cinco años al tiempo de la elección.

Dada la separación de Iglesia y Estado, de relevancia en su época, se excluyó a los integrantes del clero, al establecer como exigencia: “No pertenecer al Estado Eclesiástico”.

Seguramente se constató la necesidad de la preparación jurídica y de la experiencia profesional real en lo jurisdiccional pues, se establecieron los requisitos de: “Ser abogado con título oficial y práctica de más de diez años”.

Fue un desacierto la imprecisión consistente en el requisito de: “Práctica de más de diez años” pues, ante la amplia gama de actividades del abogado, en el desempeño de la función jurisdiccional, al más alto nivel, es preciso que esa práctica sea en la judicatura o en la postulación.

I) *Debates en el Congreso Constituyente de 1856*

En el Congreso Constituyente de 1856, fue motivo de amplio debate el requisito previsto en el proyecto de artículo 93 de la Constitución

de 1857, consistente en que el individuo que accediese al cargo de Ministro de la Suprema Corte necesitaba: “Estar instruido en la ciencia del Derecho, a juicio de los electores”. El diputado Reyes estimó que los electores no tendrían juicio propio para determinar quiénes reunían el requisito de estar instruidos en la ciencia del Derecho. Los electores no sabrían calificar quiénes tienen ciencia y quiénes carecen de ella. Recomendó que no se dejará la calificación al juicio de hombres que no pueden formarlos. El diputado Zarco defendió el proyecto de disposición constitucional con el argumento de que el señor Gómez Pedraza, que no era abogado, fue electo Magistrado de la Corte y que ello fue porque el país conoció que ese distinguido ciudadano tenía más ciencia, más aptitud y más probidad que muchos abogados. Mencionó que la administración de justicia ha sido el monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados y que la administración de justicia ha sido un caos, un embrollo y que, el diputado Reyes, como hombre de bien no puede estar satisfecho. Agregó que la Comisión hizo muy bien en proponer un ensayo que puede producir los mejores resultados. Indicó que, para la Magistratura, antes que ciencia, se requiere virtud y probidad y que, en caso de comparecer ante un Tribunal, la garantía del acusado está en la honradez de los jueces y no en su erudición.

El proyecto de la Comisión, en la forma indicada, por la que se permitió el acceso de legos a nuestro máximo tribunal, resultó aprobado por cuarenta y siete votos contra treinta y siete.

J) *Reforma del artículo 93 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, del 4 de junio de 1914*

El artículo 93 de la Constitución de 1857 requirió ser reformado el 4 de junio de 1914 y se estableció que para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia, se necesitaba ser ciudadano mexicano en ejercicio de los derechos políticos, ser mayor de treinta y cinco años, y menor de sesenta y cinco al tiempo de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y ser abogado con título oficial y práctica de más de diez años.

En virtud de la aludida reforma, prevaleció la cordura al determinarse la exigencia de tener título oficial de abogado. Desde otro ángulo, se destaca la introducción de un nuevo elemento: ser menor de sesenta y cinco años al tiempo de la elección.

K) *Mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, ciudad de Querétaro*

En el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechados en la ciudad de Querétaro en 10. de diciembre de 1916 se propuso, en el artículo 95, que para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesitaba: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener treinta y cinco años cumplidos en el momento de la elección; poseer título profesional de abogado, expedido por autoridad o corporación legalmente facultada para ello; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal de más de un año de prisión, a no ser que se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público; haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República, o por un tiempo menor de seis meses.

L) *Congreso Constituyente de Querétaro de 1916*

En la 54a. sesión ordinaria, celebrada la tarde del día 21 de enero de 1917, por unanimidad de ciento cincuenta votos, se aprobó el artículo 95 del proyecto.

El texto aprobado fue aquél al que nos hemos referido en el inciso precedente, con la única variante de exigir que el Ministro gozara de buena reputación y que no hubiese sido condenado por delito que ameritara pena corporal de más de un año de prisión; pero, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastimara seriamente la buena fama en el concepto público se le inhabilitara para el cargo, cualquiera que hubiese sido la pena.

M) *Reforma de 15 de diciembre de 1934*

La reforma del artículo 95 constitucional, referente a las fracciones II y III, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* del 15 de diciembre de 1934, a iniciativa del Presidente Lázaro Cárdenas.

Al reformarse la fracción II se fijó una edad máxima para ser electo Ministro de la Suprema Corte. En exposición de motivos se expresó que, en la generalidad de las legislaciones extranjeras, se señala un límite de edad para que el funcionario judicial desempeñe su cometido

y que, por razones obvias, pasados los setenta años, son excepcionales los individuos que conservan las energías físicas y la agilidad espiritual indispensable para continuar dedicándose a las arduas labores judiciales. Además, se invocó la conveniencia de facilitar el acceso a la juventud a las magistraturas judiciales

En relación con la fracción III del artículo 95 constitucional, en la exposición de motivos de la reforma de 1934, se argumentó que el precepto no requería que para ser electo Ministro de la Corte hubiese un tiempo mínimo de ejercicio profesional, lo que se juzgaba indispensable para el mejor desempeño de la delicada misión que concierne a los Ministros. Por tal motivo, se exigió una antigüedad de cinco años en la carrera de abogado.

No se objetaron las reformas y se aprobaron por unanimidad de ciento treinta y tres votos.

N) Texto anterior a la Reforma de 1994 del artículo 95 constitucional

El artículo 95 constitucional, en su texto anterior a la reforma de 1994, establecía:

“Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

“I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

“II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la elección.

“III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello.

“IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

“V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República, por un tiempo menor de seis meses”.

De los requisitos transcritos aparece que había una edad máxima que se hacía consistir en sesenta y cinco años. Como veremos posteriormente, se eliminó este requisito en las reformas de 1994. Igualmente,

se habla de título profesional de abogado, lo que se cambió en la reforma de 1994 por título profesional de Licenciado en Derecho. Otro cambio acaecido, según las reformas de 1994 fue haberse establecido, en lugar del requisito de cinco años de residencia, dos años de residencia.

Se adicionó una fracción VI y un párrafo final al artículo 95, en las reformas de 1994, a las cuales nos referiremos posteriormente.

2. BREVE REFERENCIA A CONSTITUCIONES DE ALGUNOS PAISES DE AMÉRICA LATINA³

Haremos una breve referencia a los requisitos que se han establecido en algunas constituciones latinoamericanas, con especial enfoque a la experiencia exigida en materia de judicatura.

— Respecto de la Constitución de la República Federativa de Brasil,⁴ su artículo 104 exige que los Ministros del Superior Tribunal de Justicia sean brasileños con más de treinta y cinco años y menos de sesenta y cinco años, de notable saber jurídico y reputación intachable.

La referida Constitución no obliga expresamente a ser poseedor de experiencia pero, el adjetivo calificativo de *notable* marca una relevancia singular que destaca al Ministro entre quienes son tenedores de saber jurídico. Toda la colectividad, respecto de los Ministros, da por sentado que este requisito de *notabilidad* en el saber jurídico debe ser establecido expresamente.

— Por su parte, en la Constitución Política de Colombia,⁵ el artículo 232 requiere para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado lo siguiente:

“1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

“2. Ser abogado.

“3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

“4. Haber desempeñado, durante diez años. cargos en la Rama Judicial o en Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”.

³ Cfr. *Derechos del pueblo mexicano*, t. X, *op. cit.*, pp. 95-18 a 95-21.

⁴ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución de la República Federativa de Brasil*, 1a. ed., México, 1994, trad. de Antonio López Díaz y César García Novoa, p. 65.

⁵ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de Colombia*, 1a. ed., México, 1994, p. 59.

Nos parece atinada la exigencia de diez años de ejercicio en la rama judicial pues, juzgamos que el desempeño de tan elevado cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia excluye cualquier improvisación. Lo que ya es distinto es que esos diez años en la rama judicial, el precepto los considere equiparables al mismo tiempo en el desempeño de actividades diferentes como son: Ministerio Público, abogado en ejercicio o catedrático universitario.

Según el artículo 159 de la Constitución Política de la República de Costa Rica,⁶ en el párrafo quinto, se determina que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere.

“Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años”.

A pesar de que pudiera considerarse arbitrario establecer, en cuanto a experiencia de los que accedan al cargo de Magistrado de la Corte Suprema, establecer una equivalencia de diez años en el ejercicio de la profesión con cinco años de práctica judicial, nos parecen correctas dichas cifras pues, los funcionarios judiciales ya han quedado entrenados en la dicción del Derecho.

Solamente asentamos la observación de que, se hace referencia a quienes tengan el carácter de funcionarios judiciales. En ese aspecto, juzgamos que no debiera ser preciso tener en ese momento el carácter de funcionarios judiciales, sería suficiente con el hecho de haber desempeñado la judicatura durante diez años.

— En la vigente Constitución de Cuba,⁷ publicada en la *Gaceta Oficial de la República de Cuba* del 10. de agosto de 1992, en el artículo 120 se determina que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye.

En el segundo párrafo del mismo precepto se determina que corresponde a la ley secundaria establecer los requisitos que deben reunir los jueces.

Con anterioridad a la mencionada Constitución cubana, el inciso d) del artículo 151 exigía como requisitos: haber ejercido en Cuba durante cinco años por lo menos, la profesión de abogado; o haber

⁶ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República de Costa Rica*, México, 1994, p. 37.

⁷ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución de Cuba*, México, 1994, p. 39.

desempeñado, por igual tiempo, funciones judiciales o fiscales o explicado, durante el mismo número de años, una cátedra de Derecho en establecimiento oficial de enseñanza.

Tomamos nota de que antes se exigía la experiencia de haber desempeñado durante cinco años funciones judiciales.

— La Constitución Política de la República de Chile,⁸ en el artículo 74 señala que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueron necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. A la misma ley le corresponde señalar las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban de haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas Ministros de Corte o Jueces letrados.

Aunque se hace una remisión a la Ley ordinaria, se previene que debe haber varios años de experiencia en la profesión de abogado para poder ser nombrado Ministro de Corte.

— En la Constitución Política de la República de Ecuador,⁹ en el artículo 103, párrafo quinto se exige que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requerirá:

“Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la cátedra universitaria en Ciencias Jurídicas, por un lapso mínimo de quince años.

Es notable la ampliación de experiencia, en la judicatura, al considerable lapso de quince años, lo que a juicio nuestro representa una exigencia de práctica muy útil para el desempeño de la función jurisdiccional a ese elevado nivel de Magistrado de la Corte Suprema.

— En el texto de la Constitución Política de E. Salvador,¹⁰ el artículo 176 determina:

“Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencias notorias; haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una judicatura de Primera Instancia, durante nueve años, o haber obtenido autorización para ejercer la profesión de abogado.

⁸ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República de Chile*, México, 1994, p. 43.

⁹ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República del Ecuador*, México, 1994, p. 35.

¹⁰ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República de El Salvador*, México, 1994, p. 43.

por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo”.

Sobresale la exigencia de experiencia en la materia judicial de seis años si se ha sido magistrado y de nueve años si sólo se ha sido juez. Nos parece relevante ese requisito de experiencia judicial.

— La Constitución Política de la República de Guatemala,¹¹ en su artículo 216 señala los requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos: “..haber desempeñado un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales Colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años”.

Emitimos opinión favorable al requisito que exige desempeño de un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales Colegiados pues, se evita que a la Corte Suprema de Justicia lleguen personas sin experiencia en administración de Justicia.

— Se exige en la Constitución Política de la República de Honduras,¹² en el artículo 307 que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere haber desempeñado los cargos de Juez de Letras o Magistrado de la Corte de Apelaciones durante cinco años, por lo menos o ejercido la profesión por diez años.

Nos mostramos partidarios de que se exija experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y consideramos que no debe sustituirse dicha experiencia por una equivalencia en el ejercicio de la profesión de abogado.

— Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, según la Constitución Política de la República de Panamá,¹³ artículo 201, parágrafo 5, se requiere: “Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial o del Tribunal Electoral que requiera título universitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria”.

¹¹ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República de Guatemala*, México, 1994, p. 57.

¹² Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República de Honduras*, México, 1994, p. 58.

¹³ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política de la República de Panamá*, México, 1994, p. 44.

Al parecer es equitativo que se establezca la equivalencia de ocupaciones de los abogados que ocupen el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de la Justicia pero, lógicamente, lo único que da experiencia en materia de administración de justicia es haber servido por diez años en cualquier cargo de un órgano judicial.

— El segundo párrafo del artículo 258 de la Constitución Nacional del Paraguay,¹⁴ fija los requisitos que deben reunir los miembros de la Corte Suprema de Justicia y, entre ellos, se expresa el requisito de haber ejercido efectivamente durante el término de diez años cuando menos la profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta separada o sucesivamente.

En la expresada disposición encontramos la equivalencia de tareas: ejercicio de la abogacía, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica. En realidad, lo único que da experiencia en el desempeño de la función jurisdiccional es que esos diez años hayan sido de ejercicio efectivo en la magistratura judicial.

— En el párrafo 4 del artículo 65 de la Constitución de la República Dominicana,¹⁵ se exige, para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia:

“Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado; o haber desempeñado por igual tiempo, las funciones de Juez de una Corte de Apelación, Juez de Primera Instancia o Juez del Tribunal de Tierras, o representante del Ministerio Público ante dichos Tribunales. Los periodos en que hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse”.

De nueva cuenta observamos la equiparación de actividades en el ejercicio profesional y no la exclusividad en el desempeño de funciones de Juez. Esta última actividad es la que da la verdadera experiencia para poder ejercer la función jurisdiccional en el más alto desempeño jerárquico de Juez de la Suprema Corte de Justicia.

— También se detecta que en la Constitución Política del Perú,¹⁶ el artículo 147, en el párrafo 4, se requiere para ser Magistrado de la Corte Suprema:

¹⁴ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Nacional del Paraguay*, México, 1994, p. 77.

¹⁵ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución de la República Dominicana*, México, 1994, p. 27.

¹⁶ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución Política del Perú*, México, 1994, p. 40.

“Haber sido Magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años”.

Aunque no se exige con exclusividad haber desempeñado durante diez años una magistratura, es verdad que se exigen quince años si las actividades profesionales se han realizado fuera de la actividad jurisdiccional, ya sea en ejercicio de la abogacía o en el desempeño de cátedra universitaria jurídica.

— Conforme a lo que dispone la Constitución de la República Oriental del Uruguay,¹⁷ se requiere para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.

Hay coincidencia en que se requiere antigüedad en el desempeño de la judicatura pero se puede prescindir de esa experiencia si se ha ejercido como abogado, como Ministerio Público o Fiscal. Estimamos que debiera exigirse siempre la experiencia en el desempeño de la actividad jurisdiccional.

— De manera breve, la Constitución Política de Bolivia,¹⁸ exige para ser Ministro de la Corte Suprema ser boliviano de origen, haber ejercido durante diez años la judicatura o la profesión de abogado con crédito y tener las condiciones exigidas para Senador (artículo 124).

No hay exclusividad en la exigencia de diez años de ejercicio en la judicatura, pues de manera equivalente puede haberse ejercido la profesión de abogado durante esos diez años y no es lo mismo exigir la actividad especial de ejercicio como juzgador.

El Derecho comparado, mediante el cual es posible asomarse a los prados ajenos, nos ilustra con enorme claridad sobre la importancia que las constituciones latinoamericanas conceden a la acumulación de años de experiencia en el ejercicio de la judicatura, aunque a veces permiten la alternativa de ejercicio de la abogacía. La experiencia en el desempeño de la función jurisdiccional debe ser tomada de nueva cuenta como un requisito de trascendencia puesto que, al más alto tribunal de un país no debe llegarse sin experiencia previa en la actividad propia consistente en administrar justicia. En esto radica la más idónea de las experiencias.

¹⁷ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Constitución de la República Oriental de Uruguay*, México, 1994, p. 53.

¹⁸ Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, *Bolivia. Constitución Política del Estado*, México, 1994, pp. 31-32.

3. RELACIONES DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA CON OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES

En nuestro documento supremo existen otros dispositivos constitucionales que se hallan vinculados con el artículo 95 de la Constitución. A estos preceptos nos referiremos en este apartado:

A) *Artículo 96 constitucional*

En los términos del artículo 96 constitucional, reformado en su totalidad, según aparece en el *Diario Oficial* de 31 de diciembre de 1994, el nombramiento de Ministro de la Corte ya no lo hace el Presidente de la República con aprobación del Senado, sino que el Presidente de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los Miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días.

Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos antes indicados. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

Si enlazamos el aludido artículo 96 de la Constitución con el artículo 95 de la propia Carta Magna, derivamos que el Presidente de la República no deberá incluir en la terna a persona alguna a la que le falte alguno de los requisitos indispensables que previene el artículo 95 constitucional. También estimamos que es claro que el Senado de la República puede rechazar de cualquier tema a la persona que no reúna los requisitos del artículo 95 constitucional.

Para que opere el envío de la terna por el Presidente de la República al Senado, es menester que haya de por medio una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo previene el artículo 96.

Se produce una coparticipación de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para que se haga la designación del Ministro de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación que ha de cubrir la vacante que haya surgido. Esto significa que, en cierta medida, hay una intromisión de dos poderes distintos, Ejecutivo y Legislativo en un importante asunto del Poder Judicial como es el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta intromisión no deja de ser preocupante y no se trata de un mal necesario que no pudiera llegar a remediarse, como lo veremos más adelante al analizar algunas otras posibilidades.

Es verdad que el hecho de que no sea únicamente el Poder Ejecutivo, o solamente el Poder Legislativo, los que tuvieran prerrogativas para nombrar Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya representa un avance pues, los Ministros no deben su nombramiento al Presidente de la República ni al Senado de la República, ya que ambos intervienen.

Debemos entender que, ni el Senado de la República, por una parte, ni el Presidente de la República, por otra parte, ni de *jure*, ni de *facto*, pretenden enfrentamiento alguno, pues se estima que, realmente, la Constitución previene una cooperación entre ambas entidades políticas respecto del nombramiento de Ministros de la Corte.

Siempre es interesante darle injerencia a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues no podemos soslayar que el Senado de la República también tiene la representación de las diversas entidades federativas del país.

El sistema del artículo 96 constitucional representa la considerable ventaja de que excluye la posibilidad de que hubiera un sistema de elección por sufragio, en lo que hace a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que rechazamos terminantemente dado que la tarea de dichos Ministros es eminentemente técnica y jurídica.

No podemos negar que la intervención conjunta de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo diluye la fuerza que aisladamente pudiera corresponder a ambos poderes.

B) *Artículo 76 constitucional*

El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace una relación de las facultades exclusivas del Senado de la República y, entre ellas, en la fracción VIII, se previene:

“VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las

solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario”.

La atribución contenida en la fracción transcrita del citado precepto constitucional no es, en manera alguna, arbitraria, ni absolutamente discrecional, ya que deberá ejercerse, en lo que hace a la designación de Ministros, con base en los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional.

Sin duda que el artículo 76 constitucional está estrechamente vinculado con los artículos 95 y 96 de la Constitución federal.

C) *Artículo 78 Constitucional*

En el primer párrafo del artículo 78 constitucional se previene que durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones.

Más adelante, en la fracción VII del artículo 78 constitucional, reformado, según publicación en el *Diario Oficial de la Federación* de 30 de julio de 1999, se establece la facultad de:

“VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacionales, en los términos que la ley disponga, y

A pesar de ser reciente la reforma del artículo 78 constitucional, encontramos que es impropio conceder a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, pues, según el artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 76, fracción VIII, ya el Presidente no hace nombramiento de ministros sino que lo único que hace es someter una terna a la consideración del Senado y el Senado es el que tiene la facultad de hacer la designación del Ministro que deba cubrir la vacante.

De lo anterior derivamos que, es necesario revisar y corregir el texto de la fracción transcrita del artículo 78 constitucional.

D) *Artículo 89 constitucional*

En el artículo 89 constitucional se detallan las facultades y obligaciones del Presidente de la República.

Entre esas facultades y obligaciones del Presidente de la República se halla la referente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre el particular, la fracción XVIII, reformada según *Diario Oficial* de 31 de diciembre de 1994, establece:

“Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renunciaciones a la aprobación del propio Senado”.

El nuevo texto de la fracción XVIII está debidamente coordinado con el nuevo texto que tienen los artículos 96 y 76 constitucionales ya examinados.

E) *Artículo 94 constitucional*

Para que pueda haber nombramiento de algún Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester que se produzca alguna o algunas vacantes, entre el número de Ministros que integran ese Máximo Tribunal.

De esta manera, debemos estar a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 94 constitucional, a cuyo texto nos remitimos:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministros y funcionará en Pleno o en Salas”.

Nos limitamos a la transcripción del segundo párrafo, pues, de su texto derivamos que se redujo el número de Ministros a once personas, siendo que antes eran veintiún Ministros numerarios y se podían nombrar hasta cinco Ministros supernumerarios. En virtud de esta reducción del número de Ministros, ya será más raro que se origine la necesidad de nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, se han suscitado en los diversos foros del país, múltiples opiniones de abogados en el sentido de que sería deseable aumentar el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo por la necesidad de que se vuelva al sistema de cuatro Salas especializadas, en las materias penal, administrativa, civil y del trabajo, en el más Alto Tribunal de la República y que se abandone el actual sistema, en el sentido de que una Sala esté especializada en asuntos civiles y penales y la otra, en asuntos administrativos y del trabajo. Si cobrara actualidad esa consideración de profesionistas de la abogacía, se reformaría el artículo 94 constitucional y sería necesario proceder al nombramiento de nuevos Ministros.

Con mayor número de Ministros se produciría una mayor necesidad de cubrir vacantes.

F) *Artículo 97 constitucional*

Respecto de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que ellos estén en aptitud de ejercer su cargo, es necesario que satisfagan el requisito de la protesta que previene el artículo 97 constitucional en los siguientes términos:

“Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

“Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación?”

“Ministro: Sí, protesto”.

Presidente: “Si no lo hicieris así, la Nación os lo demande”.

Resulta interesante que el precepto transcrito se eleve a la categoría de solemne pues, en la referida disposición constitucional hasta se transcriben las palabras literales que deben emplearse en la protesta.

Desde el punto de vista del fondo, es bueno que los Ministros de la Corte, desde que se inician en el ejercicio de su encargo, reiteren su deber de guardar y de hacer guardar la Constitución de la República, así como las leyes que de ella emanan. También estamos de acuerdo en que si los Ministros actúan así, ello redundará en el bien y prosperidad de nuestro país.

G) *Artículo 98 constitucional*

En materia de nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser considerado el nombramiento de algún Ministro interino. A esta situación se refiere el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer, en su primer párrafo, lo siguiente:

“Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución”.

Si se da aplicación al artículo 96, el nombramiento del Ministro requiere el sometimiento de una terna a la consideración del Senado y el procedimiento será el mismo que para el nombramiento de un Ministro definitivo.

También debe haber un nombramiento de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que haya habido defunción de alguno o separación definitiva. En este caso se está en la hipótesis de vacante y debe procederse al nombramiento de Ministro conforme al artículo 96, así lo dispone expresamente el segundo párrafo del artículo 98 constitucional, al determinar:

“Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución”.

Todo el artículo 98 constitucional fue reformado, según decreto que se publicó en el *Diario Oficial* de 31 de diciembre de 1994 para establecer la hipótesis de nombramiento de algún Ministro interino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más adelante, según Decreto Publicado el 22 de agosto de 1996 se incorporó al artículo 98 el texto del artículo 99 constitucional, relativo a las renunciaciones y licencias de los Ministros. De esta manera las renunciaciones y licencias de los Ministros están regulados de la siguiente manera en los dos últimos párrafos del artículo 98 constitucional:

“Las renunciaciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

“Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años”.

Otra vez, respecto de renunciaciones de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, constitucionalmente, se establece la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estimamos que, dentro de la división de poderes, estas situaciones debieran ser exclusivas del Poder Judicial de la Federación.

Lo mismo ocurre respecto de licencias de Ministros, cuando excedan de un mes, caso en el cual toman intervención los poderes Ejecutivo y Legislativo. La opinión nuestra es en el sentido de que no está justificada la intervención de esos otros poderes Ejecutivo y Legislativo.

4. BREVE ANALISIS DOCTRINAL

A efecto de evitar una extensión excesiva al presente estudio, será somera la referencia que haremos respecto de importantes opiniones que vierten algunos estudiosos de lo jurídico:

A) *Alejandro Hamilton*¹⁹

En *El Correo de Nueva York*, correspondiente al 10. de abril de 1788, se refirió Alexander Hamilton a la facultad del Presidente de los Estados Unidos de América para: "...proponer y, con el consejo y el consentimiento del Senado, nombrar a los jueces de la Suprema Corte".

El citado autor enunció las ventajas de este sistema de nombramiento y, entre ellas, destacamos las siguientes:

— No es fácil conseguir un plan que ofrezca más probabilidades que éste de favorecer la selección juiciosa de los hombres que han de ocupar los cargos de la Unión, pues la verdadera prueba de un buen gobierno es su aptitud y tendencia a producir una buena administración. Es decir, según entendemos a Hamilton, el Ejecutivo desea un buen gobierno y dada su intervención en el nombramiento de los jueces de la Corte, tal gobierno deberá tener también buenos jueces en la Corte.

— La facultad de nombramiento de jueces de la Corte no se le da a un solo hombre pues, concurre el Senado que es una asamblea escogida, con un número moderado de miembros.

— Creía que mediante ese sistema habría una gran probabilidad de conseguir que ocupe ese puesto un hombre de mérito o cuando menos digno de respeto. El Presidente actuaría como un hombre de buen juicio, con capacidad para analizar y justipreciar las cualidades peculiares que convienen a los distintos empleos.

— El Presidente tendrá la responsabilidad del nombramiento y resultará un sentido más vivo de su deber y un cuidado más estricto de su reputación. Se sentirá más fuertemente obligado y tendrá más interés por investigar con detenimiento las cualidades necesarias para los cargos que se deben cubrir y preferirá imparcialmente aquellas personas que en justicia tengan más derecho a ellos. Tendrá menos ligas de carácter personal que satisfacer que un cuerpo de hombres y se verá menos en peligro de que lo extravíen los sentimientos amistosos o afec-

¹⁹ Cfr. HAMILTON, MADISON Y JAY, *El Federalista*, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pp. 322-325.

tivos. “Un hombre bien intencionado, aun con su sola inteligencia, no puede ser víctima de la confusión y de la desorientación que con frecuencia se encuentran en las determinaciones de una entidad colectiva, como consecuencia de la adversidad de opiniones, sentimientos e intereses que la perturban y desvían. . .”.

– Estima que si el nombramiento lo hiciera una asamblea, se verían en plena acción las simpatías y antipatías, los antagonismos y preferencias, las aficiones y animadversiones, tanto particulares como de partido, que experimenten los distintos componentes de la asamblea. La elección así hecha representaría el resultado de una victoria ganada por un partido sobre otro de una transacción entre ambos. En los dos casos, lo más frecuente será que los méritos de los elegidos pasen inadvertidos.

– En cuanto a la intervención del Senado, considera que éste no puede verse tentado a rechazar al candidato propuesto, debido a la preferencia que sienta por alguna otra persona ya que no puede estar seguro de que la que desearía será la señalada en una segunda propuesta o en otra posterior. No podría tener la certeza de que la proposición futura presentara a un candidato que le resulte un poco más aceptable. Además, su inconformidad puede lanzar cierto estigma sobre el individuo que rechazara y tener la apariencia de un reproche al primer Magistrado, no es probable que su sanción será negada a menudo, cuando no medie en razones especiales y poderosas para ello. Con Hamilton, estimamos que el Senado no puede decidir un rechazo si carece de fundamentos y motivos objetivamente válidos para ello.

– Justifica Hamilton la intervención del Senado como un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial y tenderá marcadamente a impedir la designación de personas poco adecuadas, debido a prejuicios locales, a relaciones familiares o con mira de popularidad. Agrega que, sería un factor eficaz de estabilidad en la administración.

– Considera que si el Presidente dispusiera él solo de los empleos públicos se dejaría gobernar por sus intereses e inclinaciones personales con más libertad que estando obligado a someter el acierto de su elección a la discusión y resolución de un cuerpo distinto e independiente y más cuando dicho cuerpo es toda una rama de la legislatura. La posibilidad de un fracaso serviría de aliciente poderoso para proceder con cuidado al hacer su proposición. Habría peligro para su reputación, en el caso de que se le descubriera un espíritu de favoritismos o que andaba en forma indebida a caza de popularidad, por parte de un cuerpo cuya opinión tendría gran influencia en la forma-

ción de la del público. Expresamente indica: “Le daría vergüenza y temor proponer para los cargos más importantes o provechosos a personas sin otro mérito que el de ser oriundas del Estado de que procede, el estar relacionadas con él de una manera o de otra el de poseer la insignificancia y ductilidad necesarias para convertirse en serviles instrumentos de su voluntad”.

— Se refiere Hamilton a la posibilidad de que surja la objeción en en el sentido de que el Presidente pueda obtener que el Senado adopte una aptitud complaciente frente a sus propósitos. Asevera que suponer esta venalidad universal en la naturaleza humana es un error tan grande como suponer la rectitud universal. En su opinión, la institución del poder delegado implica que existen en la humanidad una porción de honor y virtud, sobre la cual puede cimentarse cierta dosis de confianza; y la inexperiencia confirma la teoría.

Conforme a nuestro criterio personal, habrá mayor seguridad en una buena designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia si la terna del Ejecutivo y la intervención del Senado se sujetaran a la comprobación de que la persona es idónea para ocupar el cargo de Ministro y esto se puede determinar a través de exigir que se cumplan rigurosos requisitos preestablecidos.

Desde ángulo diverso, no podemos negar que resultan sumamente interesantes las consideraciones que, en su época, hizo Hamilton, sobre todo si las enfocamos bajo la perspectiva de lo que ha ocurrido en nuestro país, a pesar de que, por mucho tiempo, se siguió el sistema norteamericano de nombramiento por el Presidente de la República, con la ulterior aprobación del Senado.

B) *Felipe Tena Ramírez*²⁰

En primer término, el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez alude al sistema que seguía la Constitución de 1857, en cuyos preceptos se establecía la base de que el nombramiento de los Ministros requería elección indirecta en primer grado y cada uno de ellos duraba en su encargo seis años (artículo 92).

Hace referencia Tena Ramírez a la severa crítica de ese sistema que hacía valer Emilio Rabasa, ya que este autor sostenía que la elección popular no es adecuada para hacer buenos nombramientos, sino para

²⁰ TENA RAMÍREZ, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1949, 2a. ed., pp. 321-322.

llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia. Argumentaba Rabasa que, en los puestos de carácter político, que son los que se confieren por elección, la lealtad de partido es una virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante, indigno de un hombre de bien. Reprobaba el nombramiento hecho por el Ejecutivo, con duración limitada en el puesto y defendía la inamovilidad del magistrado como medio de obtener la independencia del Tribunal. Se inclinaba por el nombramiento del Ejecutivo, con aprobación del Senado, por dar lugar a más ocasiones de acierto. Manifestaba Rabasa que las ligas de origen se rompen a través de la inamovilidad porque el Presidente que confiera el nombramiento no puede revocarlo ni renovarlo. El magistrado vive vida propia, sin relación posterior con el que tuvo la sola facultad de escogerlo entre muchos, y que “no vuelve a tener influencia alguna ni en sus funciones ni en la duración de su autoridad”.

De lo anterior desprendemos que, un magnífico complemento a la designación del Ministro por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, es la inamovilidad judicial.

Nos informa Tena Ramírez que las reformas a la Constitución, correspondientes al año de 1928, respetaron la inamovilidad consagrada por el artículo 92 constitucional pero, modificaron el artículo 96 al encomendar al Presidente de la República, con la aprobación del Senado, el nombramiento de los Ministros de la Corte, con lo que se reconoció la tesis que sustentaba años atrás Rabasa.

Califica Tena Ramírez de desafortunada la reforma a la Constitución que se operó en el año de 1934, por la que se suprimió la inamovilidad de los Ministros y les señaló seis años de duración en sus cargos. Como dicho tiempo coincide con el periodo que corresponde al Presidente de la República, y éste al iniciar su periodo designa a los Ministros con aprobación del Senado por lo que, concluye Tena Ramírez que: “...el sistema implantado en 1934 es el peor de todos los sistemas censurados, pues convierte en simples agentes del Ejecutivo a los Ministros de la Suprema Corte.”.

La reforma a la Constitución, que se publicó en *Diario Oficial de la Federación* del 21 de septiembre de 1944, restableció la inamovilidad judicial, y se regresó así al sistema de 1928.

A juicio de Felipe Tena Ramírez, se requieren dos exigencias: una buena designación y la inamovilidad. Son dos condiciones para una recta administración de justicia y deben estar siempre juntas.

Expone Tena Ramírez que la inamovilidad ha resentido siempre los embates de la política, pues cada Presidente quiere formar una Corte nueva, con elementos que sean de su partido o que simplemente por deberle el puesto no constituyan un peligro de oposición.

Finalmente, Tena Ramírez señala que parece difícil que, en México, llegue a implantarse definitivamente y sea respetado en toda su integridad, el principio de la inamovilidad judicial, que es condición indispensable de independencia en la administración de la justicia.

En lo que hace a la edad máxima de sesenta y cinco años que preveía el artículo 95 constitucional, según la reforma de 1934, se pronuncia Tena Ramírez en contra de ella y argumenta: "...la decrepitud no suele llegar para el profesionista a los sesenta y cinco años, sino que antes bien concurren muchas veces en esa edad los conocimientos, la experiencia y la serenidad del juicio".

Nos parecen sumamente acertados los argumentos esgrimidos por Felipe Tena Ramírez, tanto en cuanto a la inamovilidad, como respecto del requisito de un máximo de edad. Por ello, manifestamos nuestro apoyo.

C) Ignacio Burgoa Orihuela ²¹

El Maestro Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Ignacio Burgoa Orihuela, ha aseverado que la inamovilidad judicial es condición relevante para una recta administración de justicia, en atención a que:

— Supone la independencia del juzgador frente al gobernante que la hubiere designado.

— Finca la imposibilidad jurídica de que éste o cualquiera otra autoridad del Estado lo deponga.

— Consolida jurídicamente al buen juzgador, cuando éste tiene las calidades humanas necesarias.

— Permite al juzgador actuar durante un periodo de aptitud vital sin la amenaza de la cesación de sus funciones jurisdiccionales, bien por la expiración de un plazo más o menos corto o convencionalmente fijado

²¹ BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *Necesaria reivindicación del prestigio del Poder Judicial Federal*, Unión Gráfica, S. A., México, 1992, pp. 36-52.

por la ley, o bien por la remoción respectiva que pudiera decretar alguna autoridad estatal.

Para que funcione la inamovilidad se requiere un supuesto humano cualitativo, basado en la honestidad, preparación cultural, conocimiento del Derecho, comprensión de los altos valores del espíritu y de la sociedad, valor civil y patriotismo.

En términos absolutos y radicales no se puede afirmar, en opinión del maestro Burgoa, que el sistema de la inamovilidad de los jueces sea en sí mismo conveniente o inconveniente, bueno o malo, garante de la recta administración de justicia u obstáculo para su debida impartición, porque su estimación en uno u otro sentido depende de la presencia o ausencia de la base humana que se menciona en el párrafo que antecede.

Respecto a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inamovilidad sólo se justifica si el nombramiento recae en las personas con la tipología indicada. Las cualidades subjetivas del buen juez deben perdurar durante un tiempo razonable para que la inamovilidad opere definitivamente. El propio nombramiento no debe comprender *ipso jure* la inamovilidad. Es la conducta judicial la que la legitima. Quien sea designado Ministro de la Corte debe conservar las cualidades que se hubiesen tomado en cuenta al expedirse su nombramiento. Así, la persona nominada para dicho cargo debe permanecer en su cargo cuatro años y si al término de este periodo conserva su fama como buen juzgador, en la opinión pública, principalmente forense, se le ratificaría como Ministro con el carácter de inamovible.

Nosotros sustentamos la idea de que la inamovilidad deberá existir desde que se produce el nombramiento del Ministro, siempre que este nombramiento esté requisitado cuidadosamente para que al cargo de Ministro de la Corte puedan llegar los que sean debidamente merecedores de ese cargo, en el entendido de que, a pesar de la inamovilidad se pueda remover a quienes incurran en los graves motivos que pueden dar lugar a la remoción, previa satisfacción de la garantía de audiencia y cuando la licitud de su actuación o su ineptitud estén debidamente probadas.

El maestro Burgoa atribuye un grave deterioro a la Suprema Corte en virtud de las reformas que entraron en vigor el 15 de enero de 1988 y puntualiza entre lo más negativo de ellas lo siguiente:

- a) Segregación de la Suprema Corte del control de legalidad.
- b) Establecimiento en favor de ella de una vaga e imprecisa "facultad de atracción", y

c) Potestad irrestricta para los Tribunales Colegiados de Circuito en el sentido de sentar jurisprudencia y desentenderse de la sustentada por la propia Corte hasta antes de la fecha señalada.

Propone el maestro Burgoa restituir a la Suprema Corte el control de la legalidad en los siguientes casos:

1. Cuando se trate del amparo penal directo, en relación a los delitos previstos en el artículo 22 constitucional y al de narcotráfico.

2. En los casos de amparo directo en que la Federación o la Nación, como personas morales, hayan sido parte en el juicio civil o administrativo en que se haya pronunciado la sentencia definitiva reclamada.

3. En los casos en que el laudo combatido de los tribunales de trabajo recaiga en conflictos colectivos laborales de interés federal o regional.

Además, en concepto del maestro Burgoa, la Suprema Corte de Justicia deberá ser la única facultada para establecer jurisprudencia sobre interpretación de la Constitución, de leyes federales o locales, de reglamentos heterónomos que expida el Presidente de la República y de tratados internacionales.

En lo que atañe concretamente a los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de las cualidades cívicas y morales que deben concurrir en todo miembro de ese Alto Tribunal, sus integrantes deben conocer el Derecho. Observa el maestro Burgoa que la Constitución no incluye entre los requisitos para ser Ministro, las exigencias de sabiduría y de experiencia jurídicas. Por esta omisión, opina el maestro Burgoa: "...suelen hacerse por el Presidente de la República designaciones en favor de personas que no son auténticos y verdaderos juristas, circunstancia que, en su criterio, lesiona la administración de la Justicia Federal".

De esa manera, sugiere que, en los preceptos conducentes de la Constitución y de la Ley Orgánica respectiva, se consigne el requisito de que, para ser Ministro de la Suprema Corte, magistrado de Circuito o Juez de Distrito, se requiera, según fama pública haberse distinguido en la Judicatura, en el ejercicio profesional o en la docencia o investigación jurídica. En su opinión, esta condición será un obstáculo insuperable para que se designen funcionarios judiciales federales que no gocen de dicha distinción, sino que su nombramiento provenga de la improvisación o de la "obsequencia presidencial que tanto daño causan a la impartición de la justicia".

Otro requisito, al que se refiere el maestro Burgoa, es el de la apoliticidad. Propone se reforme la Constitución para que se establezca

como requisito: “No pertenecer a ningún partido o asociación políticos”. Estamos de acuerdo en que los Ministros de la Corte no deben, a partir de que sean designados, realizar actividades de carácter político. La prohibición correspondiente podría establecerse en el artículo 101 constitucional y la infracción a esta prohibición podría sancionarse con la pérdida del cargo.

Sugiere el tratadista de Amparo, Ignacio Burgoa Orihuela, que se fije como requisito para ser designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia:

“Figurar en las listas que le presenten al Presidente de la República las Asociaciones y Colegios de Abogados del país y las facultades y escuelas de Derecho que en él funcionen”.

Completa este requisito con una disposición constitucional que propone en el sentido de que los nombramientos de los Ministros de la Corte serán hechos por el Presidente de la República de entre los individuos que figuren en las listas antes mencionadas.

Es muy interesante el sistema de las listas a que se refiere el distinguido maestro Burgoa. Sobre el particular, sólo podemos objetar que es factible que las agrupaciones profesionales y las instituciones de enseñanza profesional, influidas por camarillas de elogios mutuos traten de favorecer a miembros de su equipo y de postergar a personas capaces que no gozan de sus simpatías.

En tal virtud, estimamos que puede tomarse como buena la idea de formar listas de aspirantes al cargo de Ministro de la Corte y que el Presidente de la República procediera a designar únicamente alguna de las personas que figuren en esas listas.

Sin embargo, las listas de aspirantes deberán formarse en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, una vez al año, podría convocar, públicamente, en toda la Nación, mediante una convocatoria que podría publicarse en el *Diario Oficial de la Federación* y en dos diarios de distribución nacional a efecto de incluir en esas listas a quienes reunieran los rigurosos requisitos establecidos para poder ser incluidos como aspirantes al rango de Ministro de la Suprema Corte.

En el apartado siguiente desarrollaremos algunas ideas sobre ese particular.

5. *OPINIÓN PERSONAL. PROPOSICIÓN DE UN SISTEMA PARA EL NOMBRAMIENTO DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN*

Naturalmente que la emisión de reflexiones personales tiene como respaldo el previo análisis de la temática que se contiene en los cuatro apartados que anteceden. Nuestra opinión personal podemos puntualizarla de la siguiente manera:

1. Los requisitos fundamentales para ocupar el cargo de alto rango denominado: “Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” no deben dejarse para que los establezca el legislador secundario. Corresponde al constituyente original o al constituyente permanente señalar los elementos que han de satisfacer quienes aspiren a tan elevado sitio.

2. Dado que en la época moderna se han expandido los centros de estudio para preparar abogados en todo el territorio nacional y dada la naturaleza típicamente jurídica de la función jurisdiccional que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, es inexcusable la tenencia del título correspondiente que se denomina: título de Licenciado en Derecho o título de Abogado. Ya no sería factible, de ninguna manera, acceder al honroso cargo de Ministro de la Corte si se tuviera la calidad de iletrado.

3. No obstante lo establecido en el punto que antecede, todavía sería válido exigir, como antaño ocurría, “luces no vulgares” para ser Ministro de la Corte, es decir, una capacidad intelectual sobresaliente, la que pudiera acreditarse con altas calificaciones durante los estudios de la abogacía. Las “luces no vulgares” exigidas por la Constitución de Apatzingán eran el medio para obtener la finalidad, misma que se hacía consistir en ser apropiadas para el desempeño de las “augustas funciones” de Ministro de la Corte. El adjetivo calificativo de “augustas” es muy acertado: ocupar el cargo de Ministro de la Corte es acceder a un puesto que infunde y merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. De esa manera, el precepto constitucional que fije los requisitos para ser Ministro de la Corte requiere ser cuidadosamente proyectado.

4. La buena reputación, la conducta intachable o la ausencia de delito alguno, ha sido un requisito reiteradamente repetido, por estar plenamente justificado, a través de la evolución histórica constitucional en nuestro país.

5. Exigir una edad mínima de treinta y cinco años, en diversos documentos constitucionales, era un requisito acorde con la tenencia de una mayor experiencia, que conduce a una más desarrollada madurez de juicio. En esa forma, tal requisito se acepta y no amerita mayor comentario.

6. Es indudable que, era un acierto en las Bases Orgánicas de 1843 exigir ejercicio profesional por espacio de diez años en la judicatura o ejercicio profesional de quince años en el foro, en estudio abierto. Esta exigencia está coordinada con un desempeño de la judicatura a un alto nivel como es el propio de Ministro de la Corte. El desempeño de esa misión elevada no puede depositarse en una persona con precariedades en cuanto a experiencia. En la Corte no pueden admitirse improvisaciones ni primeros aprendizajes. Para acceder al cargo de Ministro de la Corte debe ser un impedimento no haber conocido la práctica profesional de la abogacía. No se pone en tela de juicio la trascendencia que pudieran tener otras actividades jurídicas o legales simplemente, el papel que deberá asumir un Ministro de la Corte exige pericia en el ejercicio de la abogacía o pericia en el desempeño de la función de juzgador.

7. Convertir el cargo de Ministro de la Suprema Corte en un puesto al que se debe llegar por medios electorales no es apropiado. Equivale a una contaminación política que desvía al Ministro de su augusta misión, eminentemente técnica y profesional, para convertirlo en un político militante.

8. A juicio nuestro, no basta una exigencia genérica de ciertos años de práctica profesional en la abogacía. Dada la amplia gama de actividades profesionales del abogado, deberá haber precisión en los requisitos para ser Ministro de la Corte. Tal práctica deberá haberse desarrollado en la judicatura o en el ejercicio profesional ante los tribunales.

9. Muy ilustrativo es el hecho de que, en apreciable número de disposiciones constitucionales de países de América Latina, es requisito reiterado el consistente en que se haya desempeñado por varios años la función jurisdiccional. Ello evita improvisaciones y acceso a la Corte a quienes desconocen la especializada actividad jurisdiccional.

10. El artículo 95 constitucional, fijador de los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte no es precepto aislado que pueda ser sacado de contexto para su exégesis. Como es natural existen otras disposiciones constitucionales vinculadas con dicho dispositivo a las que nos hemos referido.

11. La facultad concedida consitutionalmente al Presidente de la República para proponer una terna e intervenir en el nombramiento de Ministros de la Corte no es totalmente discrecional pues, debe ajustarse a los requisitos constitucionales establecidos para ocupar el cargo de Ministro de la Corte. De la misma manera, la Cámara de Senadores, al hacer la designación de Ministro, con base en la terna propuesta, tendrá que apegarse a los requisitos que la Constitución exige a quien ocupe el cargo de Ministro de la Corte.

12. La intervención combinada del Presidente de la República y del Senado tiene la virtud de diluir la dependencia de un solo Poder. Si a esto se le suma la inamovilidad de los Ministros, la independencia de ellos será aún más sostenible.

13. Son muy atendibles los argumentos doctrinales que esgrimía Alexander Hamilton para apoyar el nombramiento de Ministros por el Presidente y su posterior aprobación por el Senado. Debe ser preocupación del Presidente que el puesto de Ministro lo ocupe un hombre con méritos, digno de respeto. El Presidente debe actuar como un hombre de buen juicio que analice y justiprecie las cualidades peculiares del candidato a Ministro. Tendrá interés en investigar con detenimiento las cualidades necesarias para ese cargo y preferirá a las personas que, imparcialmente y, en justicia, tengan más derecho a ese cargo de Ministros. El Senado no puede rechazar a una persona de la terna si carece de razones especiales y poderosas para la repulsa. Recordemos que Hamilton establecía que para evitar cualquier favoritismo presidencial, el Senado desempeña esa intervención revisora ulterior y puede frenar lo inconveniente para el conglomerado.

14. Cuando el nombramiento de Ministro de la Corte esté bien requisitado puede añadirse la inamovilidad puesto que ésta es una garantía de autonomía y de independencia para el Ministro de la Corte, ya que le corta cualquier vínculo original con su nombramiento.

15. Las opiniones doctrinales de Emilio Rabasa, de Felipe Tena Ramírez y de Ignacio Burgoa Orihuela orientadas a la defensa de la inamovilidad de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia están debidamente justificadas y las compartimos plenamente. Por supuesto, si no hay una buena designación de Ministro de la Corte, la inamovilidad, de ventaja se convierte en una carga. He allí la importancia de unos buenos requisitos para que sea posible que los mejores elementos lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

16. El requisito de una edad máxima de sesenta y cinco años, para ser Ministro de la Corte, que preveía el artículo 95 constitucional, se

rechazó con suficientes razonamientos por Felipe Tena Ramírez. Hacemos nuestros sus argumentos en el sentido de que la decrepitud no suele llegar para el profesionista a los sesenta y cinco años, sino que, antes bien, concurren en esa edad los conocimientos, la experiencia y la serenidad del juicio. Naturalmente que, si por desgracia, a esa edad, o a una edad anterior o a una edad más avanzada surgen limitaciones a las respectivas capacidades físicas o mentales, habrá impedimento para continuar con las rigurosas tareas de Ministro de la Suprema Corte y en tales supuestos el Ministro se retirará por decisión propia o por sugerencia, o por exigencia de sus colegas Ministros.

17. En cuanto al requisito que hace consistir el constitucionalista y amparista Ignacio Burgoa Orihuela en que el Ministro de la Corte no pertenezca a ningún partido o asociación política, estimamos que ese no debe ser un impedimento pero, compartimos su inquietud. Los Ministros de la Corte tendrán prohibido, a partir de su nombramiento, realizar actividades de carácter político pues, dichas actividades mermarían su tiempo que debe estar dedicado al desempeño de su cargo y se distraerían de su labor que es tan delicada y relevante. Además, podrían sufrir privación de la independencia y autonomía que requiere su trascendente actividad jurisdiccional. Por ello, en concepto nuestro, deberá modificarse el artículo 101 constitucional para agregar la prohibición, a los señores Ministros, de la realización de actividades políticas, en el entendido que la infracción a ese deber de abstención se sancionaría con la pérdida del cargo.

18. El 5 de diciembre de 1994 se envió por el Presidente de la República a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión una iniciativa presidencial para realizar una amplia y profunda transformación del Poder Judicial de la Federación, a través de la cual se propusieron reformas, adiciones y derogaciones a varios preceptos constitucionales vinculados con el nombramiento de Ministros, en la inteligencia de que este trabajo lo hemos basado en las disposiciones constitucionales ya reformadas.

19. Consideramos que, después de lo que se ha examinado en el presente estudio, pudiéramos intentar la formulación de un sistema que tuviese la finalidad de llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los mejores elementos humanos. Para ello, desde perspectivas objetivamente válidas, nos permitiríamos puntualizar las siguientes sugerencias:

A) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de enero de cada año, publicaría en el *Diario Oficial de la Federación* y en un

diario de los de mayor circulación a nivel nacional, una convocatoria dirigida a licenciados en Derecho o abogados titulados del país, con cédula profesional registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Los profesionales del Derecho convocados deberán tener, por lo menos, una experiencia, actual o anterior, de cinco años continuos en el desempeño de funciones como Magistrados, en el fuero común o en el orden federal, con un promedio de calificaciones, en sus estudios de Licenciatura en Derecho o de Abogacía no inferior a nueve o su equivalente, como promedio de todas las materias estudiadas.

B) El objeto de la convocatoria sería expedir, a quienes reunieran los requisitos anteriores y pasaran los exámenes a los que nos referiremos, patentes de aspirantes a Ministros de la Suprema Corte de Justicia. El efecto de la obtención de la patente sería poder ser incluidos en las listas de las que se elegirían las ternas para realizar el nombramiento de Ministros de nuestro Máximo Tribunal.

C) Ante una Comisión de Tres Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designados para ese efecto por el Pleno de la Corte, los solicitantes a las patentes de aspirantes a Ministros presentarían un examen escrito de conocimientos teóricos y prácticos sobre el juicio de amparo. El mismo examen se haría para todos los aspirantes de ese año en la fecha y lugar que determinase la Comisión de la Corte. El interrogatorio para el examen se escogería, entre diez interrogatorios distintos preparados a ese efecto, por un Notario Público que intervendría antes del examen para verificar que los diez interrogatorios estuviesen en sobres cerrados y se escogería por el Notario uno de los sobres cerrados. La Comisión de la Corte prepararía y calificaría los exámenes y a los aspirantes se les comunicaría la calificación respectiva. Los aspirantes tendrán derecho a ver su examen calificado.

D) Adicionalmente, en la fecha y lugar que señale la Comisión de la Corte, los solicitantes a las mencionadas patentes presentarían un segundo examen consistente en la redacción de un proyecto de sentencia en un asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para los efectos de la selección del asunto que deberá proyectar cada solicitante, se sortearán, ante Notario Público, y en sobres cerrados, los asuntos respectivos para que los resuelvan los solicitantes.

E) A efecto de eliminar cualquier sospecha de favoritismo, o parcialidad, o subjetivismo, algún solicitante inconforme con las califica-

ciones que le hayan puesto en los respectivos exámenes podrá recurrir esas calificaciones ante el Pleno de la Corte y la resolución del Pleno de la Corte será definitiva.

F) Los aspirantes a Ministro de la Corte, que hayan obtenido la patente respectiva por haber obtenido una calificación superior a ocho, en la escala de uno a diez, en los dos exámenes mencionados, serán incluidos en un Registro de Patentes de aspirantes a Ministro de la Corte, en el que aparecerá una síntesis de su *curriculum vitae*, su fotografía, los resultados de sus exámenes y su dirección y teléfono para su localización.

G) Cada año, en el mes de enero, los poseedores de patente de aspirante a Ministro de la Corte enviarán a ésta una comunicación escrita en la que actualizarán sus datos biográficos y también los datos necesarios para su localización.

H) El Presidente de la República escogería, cuando surgiera una vacante en la Corte, a tres profesionales con patente de aspirante a Ministro y la terna se enviaría al Senado para que este cuerpo colegiado elija al profesionista de mayores méritos y éste será el que ocupará la vacante de Ministro de la Corte.

I) El nombramiento así realizado estará tutelado por la característica de la inamovilidad. Dicho Ministro nombrado conforme al procedimiento señalado sólo podrá ser removido por afecciones en su salud física o mental, o por causa de responsabilidad. No habrá límite de edad.

J) El sistema que proponemos elimina cualquier vínculo de gratitud o de dependencia y el acceso a la Corte será por méritos propios y a través de un procedimiento que tiende a eliminar cualquier tipo de influencia de terceros, con el objetivo superior de llevar a la Corte a los mejores elementos humanos. El sistema que sugerimos elimina la intervención de voluntades ajenas como algunas veces se ha propuesto cuando se ha indicado que intervengan agrupaciones profesionales, instituciones docentes o centros de investigación. Los profesionales que lleguen a ser Ministros de nuestro más Alto Tribunal de Justicia será porque tienen los méritos personales adecuados para ello.

K) Por supuesto que, los solicitantes a la patente de aspirante a Ministro de la Corte deberán llenar los demás requisitos que ha menester para ese cargo, tal y como están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

L) Por la importancia que le corresponde al honroso cargo de Ministro de la Corte, el sistema de nombramiento de los Ministros de ese Alto Tribunal tendría que estar regulado en el texto de nuestra Carta Magna.

M) El sistema que se propone no entraña, en manera alguna, la adopción de instituciones extranjeras que llevaran a imitaciones extralógicas, ni a la creación de órganos burocráticos o centros de poder que pudieran monopolizar la potestad de nombramiento respecto de los más altos cargos en el Poder Judicial de la Federación.